

**Usted ha recibido una notificación en su casillero electrónico del proceso
número 07308202000255**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
FUNCIÓN JUDICIAL**

Juicio No: 07308202000255, SEGUNDA INSTANCIA, número de ingreso 1

Casillero Judicial No: 42

Casillero Judicial Electrónico No: 0704764448

Fecha de Notificación: 15 de abril de 2021

A: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y SECRETARIO DE AGUA / PAULO ARTURO
PROAÑO ANDRADE

Dr / Ab: FLOR MARIA ARMIJOS FEJOO

SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO

En el Juicio No. 07308202000255, hay lo siguiente:

Machala, jueves 15 de abril del 2021, las 16h39, VISTOS: Previo sorteo de ley avocamos conocimiento de la presente acción constitucional los Jueces Provinciales de Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro: Dr. Manuel Mejía Granda, Dr. Oswaldo Piedra Aguirre y Dra. María Medina Chalán en calidad de PONENTE; para efectos de cumplir con el requisito de motivación constante en el Art. 76 numeral 7 literal 1), Arts. 86, 87 y 88 de la Constitución de la República; en concordancia con el inciso tercero de la Disposición Transitoria Segunda del Código Orgánico de la Función Judicial; Art. 39, 40 y 41 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se emite resolución debidamente fundamentada y motivada para lo cual se considera: PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Los Jueces que integran la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, tienen potestad y competencia, en calidad de Jueces Constitucionales para conocer sobre el Recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, al estar inconforme con la sentencia que declara con lugar la acción de protección propuesta por los accionantes Liliana Maribel Ramírez Sánchez representante de la comunidad “La Mesa” la naturaleza y las generaciones futuras; Rosa Magaly Aguilar Ayala representante de la comunidad “Portete”; Manuel Jesús Quizhpilema Paguay representante del sujeto de derechos de la naturaleza cerro “La Chuva” y el colectivo ecologista Yasunidos Piñas, de conformidad con los Arts. 167, 172 y 186 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 208.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y según lo establecido en los Arts. 86 No. 2 y 88 de la Constitución de la República, en concordancia con los Arts. 7, 24 y 31 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL El proceso, se ha tramitado de acuerdo con las normas constitucionales de procedimiento, en consecuencia, al no observarse omisiones de solemnidades sustanciales, que vicien de nulidad la presente acción constitucional, y que puedan influir en la decisión de la causa; se ratifica su validez. TERCERO: IDENTIDAD DE LOS SUJETOS 3.1 ACCIONANTES: Liliana Maribel Ramírez Sánchez representante de la comunidad “La Mesa” la naturaleza y las generaciones futuras; Rosa Magaly Aguilar Ayala representante de la comunidad “Portete”; Manuel Jesús Quizhpilema Paguay representante del

sujeto de derechos de la naturaleza cerro “La Chuva” y el colectivo ecologista Yasunidos Piñas

3.2 ACCIONADOS: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, representado por su alcalde Ing. Jaime Wilson Granda Romero, y el Dr. José Aguirre Murillo, Procurador Síndico del GAD Piñas. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de El Oro, en la persona de su representante legal, Ing. Clemente Bravo Riofrío. Administración pública central, determinada en el Ministerio del Ambiente y Agua, cuya autoridad está representada por el señor PAULO ARTURO PROAÑO ANDRADE Ministro del Ambiente y Secretario del Agua (E)

3.3 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CUARTO: ANTECEDENTES DE LA PRETENSION CONSTITUCIONAL

4.1 A fs. 75 a 92 los ciudadanos Liliana Maribel Ramírez Sánchez representante de la comunidad “La Mesa” la naturaleza y las generaciones futuras; Rosa Magaly Aguilar Ayala representante de la comunidad “Portete”; Manuel Jesús Quizhpilema Paguay representante del sujeto de derechos de la naturaleza cerro “La Chuva” y el colectivo ecologista Yasunidos Piñas, deducen Acción de Protección, en contra Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Piñas, representado por su alcalde Ing. Jaime Wilson Granda Romero, y el Dr. José Aguirre Murillo Procurador Síndico del GAD Piñas, quienes en lo principal manifiestan: “...En este cantón: “de acuerdo a la información del catastro minero, que se entregó por parte de la Agencia de Regulación y Control Minero, existen 48 concesiones mineras, muchas de éstas son compartidas con los cantones vecinos de: Chaguarpamba, Portovelo, Zaruma, Atahualpa y Santa Rosa, suman un total de 2.1619, 25 hectáreas de concesiones entre materiales de construcción, metálicos y metálicos- no metálicos”. c. Dentro del Piñas megadiverso, se encuentra el cerro identificado como “La Chuva” de gran extensión (más de 50 hectáreas), lo que hace de este sujeto de derechos sea hábitat u “OIKOS”-CASA y en donde cumplen funciones diferentes seres tanto a-bióticos (suelo, aire y agua), bióticos (flora, fauna), así como comunidades de seres humanos, conformando diferentes ecosistemas. En el cerro, se ha podido apreciar que realizan sus vidas diversas mamíferas, reptiles, gran número de aves y otros seres que comparten su vida con las comunidades o sitios “Piedra Blanca”, “La Chuva”, “El Portete”, “El Guayabal” y “La Mesa”. “La Chuva” brinda un conjunto de servicios ambientales para los seres humanos permitiendo tener acceso al agua; que se realicen actividades de agricultura (alimentación) y, su suelo permite que los seres humanos se asienten en sus faldas, un entorno tranquilo y en armonía con la naturaleza, conforme usted podrá verificar en la inspección. d. Sin embargo, desde hace aproximadamente setenta años (ver mapa de Google 1969) conforme la narración de las personas más antiguas de la comunidad y de Piñas en general, en el cerro “La Chuva” se viene realizando actividades de extracción y transporte de recursos naturales no renovables como es el lastre (explotación) y otros, en diferentes puntos (cerca de la comunidad “La Mesa”, PSAD 56, coordenadas X 649710; coordenadas Y 9590573; WGS84: coordenadas X 649451, coordenadas Y 9590199, identificada por la ARCOM como cantera 1 y será tratada en delante de esa forma; lo mismo ocurrió PSAD 56: coordenadas X 649739; coordenadas Y 95901581; WGS84: coordenadas X 649480, coordenadas Y 9589784, identificada por la ARCOM como cantera 2 y será tratada en delante de esa forma) afectando la vida de diferentes sujetos de derechos que cumplimos nuestras funciones vitales y somos el cerro. Lo impresionante, Juez/a, es que, hace aproximadamente quince años la explotación de este recurso no renovable se aceleró en forma abrupta, destruyendo gravemente parte del cerro. Para realizar esta actividad de alto riesgo, calificada como minería a cielo abierto y de uso intensivo, en donde se han extraído grandes capas de tierra, piedras, realizándose perforaciones profundas con retroexcavadoras, actividades que generan mucho ruido y levanta polvo en grandes cantidades, se destruyó la zona forestal (quema y corte de árboles) y el hábitat de especies que viven en el cerro. Algo similar ocurre en el transporte del recurso extraído, para lo cual se utiliza maquinaria con gran capacidad de carga como volquetas, plataformas y otros que al salir de la cantera 1 y 2 (que también es el camino de acceso a la comunidad “La Mesa”), (i) hacen un ruido insoportable,

por el funcionamiento de las máquinas; (ii) dejan polvillo y material particulado disperso en el aire, producido por la explotación; (iii) generan afecciones a la salud, en especial tos, ojos irritados y molestias en sus oídos. Así mismo, se hace énfasis, que, en la extracción antitécnica de material, los operadores de maquinaria desde la parte más alta (25 metros o más) de las canteras 1 y 2 (cerro la Chuva) arrojan material para que sea más arenoso, levantando grandes cantidades de polvo, causando gran ruido y en algunas veces las piedras arrojadas llegan a espacios públicos como la carretera de acceso a la comunidad “La Mesa”. En concreto, se ha destruido más de nueve hectáreas del cerro “La Chuva” y al momento mucho material extraído. 60 toneladas en la cantera 1 y 50 toneladas en la cantera 2, se encuentran sueltos y que conforme la Agencia de Regulación y Control Minero, SENAGUA, GAD Municipal de Piñas, esta actividad no estaría autorizada-concesionada por el Estado que es dueño de estos recursos, es decir no existe ningún permiso ni licencia para realizar esta actividad, lo que lleva a la prenombrada autoridad a calificar la explotación como minería inconstitucional y prohibir la actividad. e. En cuanto al agua.- El veinte y dos de septiembre de 2011, la Secretaría Nacional del Agua, concedió a favor de miembros de la comunidad “La Mesa” y otras aledañas, el derecho de uso y aprovechamiento de las aguas de la vertiente La Mesa (desemboca en el río Calera) en las coordenadas 9589591, 649493, cota 1098 m. s. n. m., en media pendiente del cerro “La Chuva”, para uso doméstico y para abrevadero de animales; la comunidad “El Portete”, también se beneficia de los servicios ambientales que presta el cerro, en la misma fuente de la vertiente La Mesa, en las siguientes coordenadas: (i) Altitud 1082 m.s.n.m., X: 649472; Y: 9589727; (ii) Altitud 1012 m.s.n.m., X: 649516, Y: 9589728, utilizando el recurso hídrico para diferentes actividades como uso doméstico, consumo humano, riego, crianza de aves y cerdos. De la misma forma, el recurso hídrico proveniente del cerro “La Chuva”, quebrada La Mesa, es utilizado aguas abajo por otras personas. Este derecho ius fundamental del Buen Vivir, se ve gravemente afectado por la actividad de explotación de pétreos antes mencionada, así lo ha descrito la autoridad del Agua en el Memorándum número SENAGUA-D.H.P.-C C.A.C.Z. R.H.-2020-02, de fecha 6 de febrero de 2020, en específico: “(...) de continuar con la expansión y explotación de la cantera de material pétreo, especialmente en el rumbo Sur, las fuentes hídricas existentes en el sector, que proporcionan de agua para las actividades domésticas y agropecuarias de los moradores de los sitios el Portete y la Mesa, tienden a desaparecer”, es más, por parte de los pobladores de las comunidades “La Mesa” y “El Portete” expresan claramente que se ha reducido el caudal y acceso al agua, por lo que, han tenido que recurrir a las autoridades del GAD Municipal del Cantón Piñas, para pedir que se les dote de agua potable sin obtener respuestas motivadas, recordando que: “Las actividades contaminantes producidas por la explotación minera ilegal pueden llegar a tener impactos directos sobre la salud de las personas y adicionalmente, otra clase de impactos indirectos sobre el bienestar humano, como la disminución de productos del bosque que afecta el balance alimentario y medicinal, y puede producir cambios en las prácticas tradicionales, usos y costumbres (...)” Y además Juez/a constitucional, se puede apreciar que en la cantera 1 y 2 del cerro “La Chuva” existen ojos de agua destruidos por la explotación, brota agua desde el suelo por el movimiento de tierra que se ha hecho, existen zonas húmedas de la cantera que creemos es parte del caudal ecológico del cerro. f. En cuanto al suelo.- Es necesario establecer que la actividad minera inconstitucional y antitécnica en la cantera 1 y 2 en el cerro “La Chuva” se ha realizado sin seguir ningún tipo de lineamiento profesional, por lo que, es una destrucción “casi vertical, de más de 40 metros de altura; no se evidencia bermas de seguridad, ni señalética”, generando que grandes cantidades de suelo se deslicen principalmente en épocas de invierno, también se aprecia gran número de grietas de longitud extensa: (i) alrededor de las canteras, (ii) fuentes de agua (iii) inmuebles de comuneros/as. Esta circunstancia amenaza en que parte del cerro pueda deslizarse hacia las comunidades aledañas a las canteras, tapar caminos de acceso, fuentes de agua, o causar afecciones a las personas que todos los días transitan

alrededor de las canteras. A todo esto, se debe enfatizar que esta actividad inconstitucional ha consumido más de 9 hectáreas del cerro. g. Estando la cantera número 1 y 2 ubicadas en el camino de acceso a la comunidad “La Mesa”, todos los días habitantes de esta comunidad tienen que sufrir un calor excesivo, lodo (dependiendo de la época), polvo, soledad, tristeza y miedo al transitar por las canteras y percibir la magnitud del daño y destrucción provocada. h. Estas situaciones han sido tomadas en cuenta por la comunidad “La Mesa”, “Portete, en sus directivas y organizaciones en defensa de los derechos y ciudadanía en general, por lo cual, han solicitado desde hace diez años la intervención del Estado en estas actividades inconstitucionales, así como, la prestación de servicios públicos básicos, pese a ello, las autoridades locales no han realizado ninguna actividad para permitir el Buen Vivir, salvo la ARCOM, que en el año 2012 por denuncia ciudadana suspendió la destrucción del cerro “La Chuva” en los puntos PSAD 56, coordenadas X 649710; coordenadas Y 9590573; WGS84: coordenadas X 649451, coordenadas Y 9590199, identificada por la ARCOM como cantera 1; lo mismo ocurrió PSAD 56: coordenadas X 649739; coordenadas Y 95901581; WGS84: coordenadas X 649480, coordenadas Y 9589784, identificada por la ARCOM como cantera 2, sin embargo se continuaban realizando actividades, por lo que, nuevamente por denuncia ciudadana, en fecha 24 de enero de 2020 se prohibió la actividad destructiva en las dos canteras antes descritas y el GAD Municipal de Piñas dotó temporalmente de un guardia municipal a la entrada de las canteras (también de la comunidad la Mesa). i. Las actividades destructivas sin ningún tipo de medida o control antes descritas y realizadas en las canteras 1 y 2, han sido aprovechados (como es de conocimiento público), generalmente, de lunes a viernes con un horario de 8h00-16h00 en los últimos quince años por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Piñas y Provincial del Oro, mismos que han utilizado el material extraído en diferentes actividades. Todo esto sin cumplir con el ordenamiento jurídico ecuatoriano en cuanto a los límites permisibles para realizar actividades antrópicas de alto riesgo como la extracción de recursos naturales no renovables propiedad del Estado ecuatoriano, y olvidando reparar integralmente a la Naturaleza y seres humanos, conforme se ha solicitado en el mes de enero de 2020, pese a que, estas entidades del Estado están obligadas por la Constitución de Montecristi a respetar y hacer respetar los derechos ius fundamentales y cumplir sus atribuciones. No obstante, también se ha podido verificar que se continúa realizando actividad destructiva de minería a cielo abierto en otra parte del cerro “La Chuva”, en específico. Sistema de referencia (lugares) WGS84 UTM 17 SUR: (i) X: 648403, Y: 9590053; (ii) X: 648422, Y: 9590080; (iii) X: 648590; Y: 9590236, conforme vuestra Autoridad podrá apreciar en las fotografías adjuntas. Así mismo, se han realizado actividades mineras dentro del inmueble denominado Recinto Ferial, y en otro lugar, se está modificando el suelo de parte del cerro “La Chuva” para que, se asiente un relleno sanitario, ubicado en las estribaciones sur occidentales del cerro, cercano a las comunidades “Guayabal” y “Piedra Blanca”. j. Se debe recalcar en este punto que el abandono que viven las comunidades que se asientan en el cerro “La Chuva”, en especial “La Mesa” es de tal magnitud que tienen acceso limitado a los servicios públicos básicos para su comunidad; centros médicos cercanos, escuelas, colegios, parques y otros de suma importancia para el desarrollo normal de la personalidad y el correcto ejercicio de derechos fundamentales, por esta razón, estas comunidades se han organizado para deliberar y tomar un conjunto de posiciones entre las que se encuentran presentar una garantía jurisdiccional constitucional, estar atentos a las actividades de extracción del material pétreo, proteger las fuentes de agua, velar por los derechos de la naturaleza y sus integrantes, empero, también se han presentado conflictos con miembros de la comunidad (una familia) que de una forma u otra rechazan nuestra decisión tomada con el argumento de que “se meterán en problemas, el Estado no brindará ayudas, se tomarán represalias”, entre otras circunstancias que complican las relaciones interpersonales a causa de actividades inconstitucionales, antitécnicas y destructivas como es la minería a cielo

abierto de pétreos. k. Estas circunstancias de sufrimiento del cerro, su ecosistema y seres que habitamos y somos el cerro, así como el grave daño que se produce a todos los sujetos de derechos que incluyen las generaciones futuras, son reales, ciertas, antijurídicas, directas, pero también potenciales, transversales y futuras, que su autoridad debe conocer y resolver conforme la Constitución de Montecristi...” Alega la vulneración de derechos constitucionales como: La naturaleza como sujetos de derecho, tiene derecho al respeto integral, derecho a la restauración. Sujeto de derechos Ser humano en cuanto a las comunidades: “La Mesa”, “El Portete” y las generaciones futuras: Categoría de derechos del Buen Vivir: ambiente sano y ecológicamente equilibrado; salud; agua y alimentación; hábitat seguro y saludable, desarrollo sostenible y seguridad humana; Categoría personas y grupos de atención prioritaria: atención preferente y especializada por parte de los poderes públicos y privados. Categoría derechos de libertad: derecho a una vida digna, derecho a la integridad personal, derecho a la igualdad formal y material, libre desarrollo de la personalidad, derecho a dirigir quejas y peticiones, derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Categoría derechos de protección: derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses, derecho al debido proceso (debido procedimiento administrativo), derecho a la motivación, derecho a la seguridad jurídica. Categoría derechos de participación: participar en los asuntos de interés público; derecho a la consulta ambiental. En cuanto a las generaciones futuras: derecho al desarrollo sustentable, derecho a un futuro seguro, derecho a una justicia intergeneracional, ecológica y climática, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho al agua, derecho al hábitat seguro y saludable, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a una tierra preservada, derecho a la libertad de opción, derecho al desarrollo individual y colectivo sobre la tierra, derecho a la seguridad jurídica. QUINTO.- MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN CONSTITUCIONAL 5.1.- NORMATIVA LEGAL.- El Art. 88 de la Constitución de la República, determina que: “la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”, esto en concordancia con el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena”. Por su parte el artículo 45 de las Reglas para el Ejercicio de Competencias de la Corte Constitucional indica: “La acción de protección garantiza judicialmente los derechos establecidos en la Constitución y demás derechos conexos definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y aquellos que de no estar señalados expresamente en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que contengan normas más favorables a los contenidos en la Constitución”. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Art.16 señala “La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente”; a su vez el Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador, trata de las Garantías Jurisdiccionales, en relación al derecho de las personas a proponer las acciones previstas en la Constitución; para asegurar la obligación del

Juzgador de impartir justicia en materia constitucional y el derecho ciudadano para acceder a la tutela de una justicia constitucional ágil, veraz y eficaz, para lo cual citaremos el Art. 2 que se refiere a los fines de la Justicia Constitucional y el Art. 3 de los Principios de la Justicia Constitucional contenidos en las Reglas de Procedimiento de las competencias de la Corte Constitucional para el período de Transición, hoy Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en tal sentido revisado tanto el proceso como la sentencia de la Acción de Protección, se observa: El Art. 24 de la Ley de Garantías y Control Constitucional, dice “APELACIÓN.- Las partes podrán en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido notificados por escrito. La apelación será conocida por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará por sorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada...” El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado...” 5.2.- SENTENCIA RECURRIDA. Consta de fojas 502 a 519, la sentencia dictada con fecha 2 de diciembre del 2020, las 11h10, por el Ab. Jonathan Rodríguez Córdova, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Piñas, constituida como Juez constitucional de instancia quien resuelve: “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, SE ACEPTA la acción de protección propuesta por los señores Liliana Maribel Ramírez Sánchez, en representación de la comunidad “La Mesa”, la naturaleza y las generaciones futuras; Rosa Magaly Aguilar Ayala, en representación de quienes integran la comunidad “Portete”; Manuel Jesús Quizhpilema Paguay, en re-presentación del sujeto de derechos de la Naturaleza cerro “La Chuva” y el colectivo ecologista Yasunidos Piñas, en contra del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS, representado por su Alcalde, el señor Jaime Wilson Granda Romero, el Dr. José Aguirre Murillo, en su calidad de Procurador Síndico del GAD. Municipal de Piñas; GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO, representado por su Prefecto, el señor Ing. Clemente Bravo Riofrío, el Abg. Francisco Moscoso Moscoso, en su calidad de Procurador Síndico del GAD. Provincial de El Oro, así también en contra de los particulares Ángel Gerónimo Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo. Por ajustarse a lo que dispone, el numerales 1, y 4 literal “c”, del artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, consecuentemente se DECLARA LA VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL de la naturaleza al respeto integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, y el derecho de las COMUNIDADES “LA MESA” y “EL PORTETE”, Y DE LAS personas al buen vivir, al agua y al ambiente sano; Y TODAS LAS GARANTÍAS RELACIONADAS A ÉSTOS, COMO HA SIDO ABORDADO AMPLIAMENTE EN ESTA RESOLUCIÓN, contemplados en los artículos 71, 12, 14 Y CAP. II DERECHO DEL BUEN VIVIR, de la Constitución de la República del Ecuador, así también se DECLARA LA

RESPONSABILIDAD DE LOS MENCIONADOS ACCIONADOS. SEXTO: REPARACIÓN INTEGRAL. Al respecto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su parte pertinente señala: “En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación.” (Art. 18), por lo que, en base al daño y violación de derechos constitucionales, y con la finalidad de reparar integralmente estos y por ende los pasivos ambientales y sociales, se dispone: **REPARACIÓN MATERIAL E INMATERIAL.-** Se ordena de forma inmediata la reparación integral de los pasivos ambientales y sociales, de las áreas explotadas del cerro La Chuva, y de las Comunidades “La Chuva” y “El Portete”, que se han visto afectadas con estas actividades, con el objetivo de que en medida de lo posible, de que los derechos constitucionales vulnerados vuelvan a su estado anterior, o a su vez se aproximen a este para su disfrute; para lo cual se valorará sus efectos reales; disponiéndose la intervención del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), del Ministerio del Ambiente y Agua, quienes deberán diseñar y ejecutar el respectivo Plan de reparación de los pasivos ambientales y sociales a aplicarse en el caso concreto, además el Plan se ejecutará en asocio con los técnicos de los GAD. Municipal de Piñas y del GAD. Provincial de El Oro y sus especialistas de la rama, quienes deberán realizar un Informe inicial de todas las actividades a realizarse, y cada 6 meses deberán presentar Informes de cumplimiento, hasta que se materialice todo el proceso de reparación integral de los pasivos ambientales y sociales. Los gastos del mencionado Plan de reparación de los pasivos ambientales y sociales serán cubiertos de la siguiente forma: 40% por parte del GAD. Municipal de Piñas, 30% por parte del GAD. Provincial de El Oro, 15% por parte del señor Ángel Gerónimo Torres López, 15% por parte de los señores Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, es necesario señalar que en el caso de los Gobiernos autónomos descentralizados, deberán proyectar el gastos, para que se genere la respectiva partida presupuestaria, así también que el incumplimiento de uno de los obligados, no limitará a que el resto de los accionados cumpla con lo ordenado, so pena de ejercerse en su contra las respectivas acciones por incumplimiento, que contempla la norma procesal constitucional; para lo cual se realizará las respectivas comunicaciones. A efectos de dar seguimiento, y que se ejecute lo ordenado en el literal anterior, se manda a intervenir de forma permanente a la Defensoría del Pueblo Ecuador, Delegación de la Provincia de El Oro, y al Ministerio del Ambiente y Agua, quienes deberán presentar un Informe inicial y también Informes semestrales sobre el avance de la ejecución del Plan de reparación de los pasivos ambientales y sociales, hasta su culminación, para lo cual se realizará las respectivas comunicaciones. Como garantía de no repetición, y con la finalidad de evitar que se continúe con el daño, y vulneración de derechos constitucionales (explotación de recursos naturales, que se ha venido realizando por más de 80 años aproximadamente) se dispone suspender indefinidamente todo tipo de explotación y actividades mineras en el cerro “La Chuva”, para lo cual se oficiará al GAD. Municipal de Piñas, al Ministerio del Ambiente y Agua, al Ministerio de Energías y Recursos Naturales no renovables del Ecuador, quienes se abstendrán de conceder concesiones en el lugar (cerro “La Chuva”). Se dispone que los accionados, cubran los gastos efectuados por los motivos de los hechos, los cuales se los fija en la suma de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, que serán pagados de la siguiente forma: 40% por parte del GAD. Municipal de Piñas, 30% por parte del GAD. Provincial de El Oro, 15% por parte del señor Ángel Gerónimo Torres López, 15% por parte de los señores Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo. Como medida de reparación inmaterial se dispone denominar al Plan de reparación así: “PLAN DE REPARACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES CERRO “LA CHUVA” PIÑAS”, denominación que deberá utilizarse para referirse al plan en cualquier espacio, y en

todo momento, por parte de autoridades públicas, privadas y la ciudadanía. Se dispone que los accionados, GAD. Municipal de Piñas, GAD. Provincial de El Oro, Ángel Gerónimo Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, procedan a pedir disculpas públicas a los accionantes, en un acto solemne, y se informará a esta autoridad de su cumplimiento. Se dispone la publicación de la presente sentencia, en los sitios web oficiales de los GAD. Municipal de Piñas, GAD. Provincial de El Oro, Ministerio del Ambiente y Agua, y del Ministerio de Energías y Recursos Naturales no renovables, por el lapso mínimo de 90 días. Se deja constancia que la presente resolución no ha podido ser emitida, dentro de los plazos de ley, debido a que el juzgador tuvo que hacer uso obligatorio del segundo periodo de vacaciones, así como también debido a la carga procesal que demanda una judicatura Multicompetente, además la necesidad de realizar una motivación de la sentencia, como lo exige la Corte Constitucional, y que de no haberse realizado la misma, implicaría una doble vulneración a los derechos constitucionales de los accionantes.- Téngase en cuenta que la parte accionada apeló oralmente la presente resolución, concediéndose dicho recurso, al tenor de lo que señala el Art. 76.7,m; de la CRE. por lo cual se remitirá de forma inmediata, el proceso al Superior, como lo contempla la norma procesal.- Así también se insiste a las partes procesales, procedan a realizar el pago de honorarios profesionales al Perito designado en la causa, de forma directa, como se lo dispuso en Audiencia.- Siga interviniendo el Secretario titular.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE”.-SIC- 5.3.- RECURSO DE APELACIÓN.- La Parte accionada interpone recurso de apelación, por no estar de acuerdo con la sentencia emitida por el Juez de Instancia; y, en forma oral ante el Ab. Jonathan Rodríguez Juez de la Unidad Judicial del cantón Piñas, Dr. José Francisco Aguirre Murillo, en representación del GAD Municipal del Cantón Piñas, como procurador judicial quien manifestó lo siguiente: “Señor juez no estamos de acuerdo con la acción presentada por la comunidad “La Mesa”, como es la suspensión definitiva de la explotación del cerro “La Chuva” , ya que no se va a poder lastrar las vías, con esto se afecta al interés colectivo y general el cual prevalece sobre el interés particular, señor juez nosotros estamos prohibidos de invertir en el sector rural, la disminución del caudal del agua es un asunto en todo el país, señor juez las peticiones de las comunidades “La Mesa” no son de competencia de GAD Municipal, señor juez el Municipio de Piñas tiene un déficit de más de Seiscientos Mil Dólares en el segundo semestre, señor juez produzco diez pruebas documentales como son expediente administrativo en el cual se le concede al señor Ángel Torres autorización para explotar material aurífero en el cerro la Chuva, así mismo el permiso al mismo señor para explotar material en el sitio la mesa por seis hectáreas por un tiempo de diez años; tenemos un oficio del señor Ángel Torres, para que se rectifiquen las coordenadas lo cual no se ha podido hacer por estar cerrado el catastro minero; oficio contestando el oficio antes referido en el cual se le hace conocer el cierre del catastro minero, oficio de la unidad de gestión ambiental al Alcalde haciendo conocer el error en las coordenadas, oficio del ARCOM indicando el cierre definitivo del catastro minero desde al año 2018; certificado de avalúos y castros en el cual certifica que el sitio la Mesa es zona rural; certificación del director financiero al alcalde donde se hace conocer el déficit del municipal en el segundo semestre. Señor juez ratifico que no estamos de acuerdo con la acción de protección este es un asunto administrativo de competencia Ambiental y no judicial por lo que solicitamos el archivo de la misma sin ser acogida. Señor juez me ratifico en el contenido de mi exposición realizada por mi parte y de los documentos presentados no se necesita darle lectura a los mismos ya que fueron corridos traslado con los mismos a los accionantes. Señor juez como representante del GAD Municipal no estamos de acuerdo en la suspensión de la actividad afectando a la comunidad cantonal por el recurso de las mismas y si estamos de acuerdo que deben de cumplir con los planes del ambiente y de los pagos establecidos por ellos, pero no estamos de acuerdo señor juez.” Sic- El Tribunal de Alzada resuelve en mérito de los autos el recurso interpuesto por la entidad pública accionada recurrente, observando para ello las alegaciones de las partes expuestas en

Audiencia Oral Pública y contradictoria ante el Ab. Jonathan Rodríguez Juez de la Unidad Judicial del cantón Piñas, al respecto el Ab. Junior Novarino Peñafiel Castillo, defensor técnico del Ministerio del Ambiente y del Agua, ha manifestado: “Señor juez nosotros como Ministerio de Ambiente y Agua recién fusionados, manifestamos ante la presente demanda en al que se indica que no hemos velado los derechos del agua; señor juez conforme al Art. 40 de LOGJCC, establece los requisitos para que proceda a una acción de protección los cuales en la presente causa no se cumplen como es la vulneración de un derecho ya que los accionantes indican que no existen permisos para la explotación de materiales áridos en el cerro “La Chuva”, lo cual no es competencia de esta cartera de estado a la que represento, nosotros en base a nuestras competencias hemos cumplido con inspecciones técnicas de la cual una consta que no existe afectación al área indicada ya que existe un área de café abandonada; así mismo consta un informe de la antigua SENAGUA, se recomienda que las entidades como son el GAD Municipal de Piñas para que tome asunto en la explotación ilegal mediante oficio; los accionantes deberían haber señalado las trasgresiones por mi defendida para que se defiendan de los mismo lo cual no lo han realizado por lo que la presente acción de protección sería improcedente ya que existen vías administrativas para reclamar los supuesto derechos violados. Señor juez al momento de emitir la sentencia respectiva en la siguiente causa se tome en consideración los procesos fundamentales como primero las actividades que se realizan en el cerro la Chuva no está establecida por ningún organismo competente como lo demás ministerios, también se hace hincapié en las atribuciones que los demás organismos estatales como es en su artículo 226 de la constitución de la república y 225 de la ley orgánica y quisiera puntualizar en el informe del perito que menciona que este fue en base a una observación directa que no se utilice algún otro mecanismo en esta acción.” Por su parte la Ab. Mariuxi Elizabeth Díaz Bravo, en su calidad de defensora técnica del GAD Provincial de El Oro, manifestó lo siguiente: “Señor juez debo manifestar que la competencia para el control en cuanto a la explotación de materiales áridos es del GAD Municipal del Cantón Piñas, por lo que mi defendida no tiene ninguna responsabilidad, señor juez la acción de protección no reúne los requisitos requeridos en el Art. 42 del LOGJCC, además de que existen vías administrativas para realizar sus reclamaciones, así mismo señor juez se debía demandar al señor Ángel Torres que tiene el permiso para explotaciones en el lugar; señor juez referente a que volquetes del GAD Provincial extraían material pétreo presento el respectivo convenio de la mancomunidad entre mi representada y GAD Municipal para el lastrado de la vía al sitio donde se realiza el relleno sanitario de este Cantón, no se ha justificado que los vehículos de mi representada hayan realizado transporte de material aurífero de las canteras en el cerro “La Chuva”, por lo que solicitamos se deseche la presente acción de protección. Señor juez el análisis que se debe de realizar es que toda actividad tanto comercial que es para el desarrollo del hombre va tener una consecuencia a la naturaleza y así como en otros lugares como la extracción de minería en Zaruma y entre otros que entonces que se deben de cerrar ya que este no se puede admitir o establecer la intervención de la parte accionante que se quiere establecer como zona protegida el cerro Chuva ya que existe lugares privados los cuales pueden ser un peligro para el ambiente, pero no por haber realizado un mal manejo si no es producto de una actividad pero se puede reducir pero eliminarlo no, pero toda actividad se lleva a cabo por medio de un plan pero no establecer el cerro Chuva como un área protegida ya que existe personas que viven ahí, y tienen sus terrenos privados, pero no se puede establecer el cerro la Chuva más allá de lo establecido en la constitución como es el derecho a la propiedad privada, al trabajo, al servicio público que beneficie a la ciudadanía y la explotación minera ya que este produce ingreso para el país y a todas las personas, pero no se puede pretender como área protegida esta zona del cerro de la Chuva y no hemos intervenido en la contaminación en esta zona ya que no somos una institución que vulnere los derechos de las personas que habitan ahí y sin que altere algún derecho constitucional.” Este Tribunal Constitucional de alzada, debe resolver el recurso de apelación,

en mérito de la demanda, la prueba, sentencia y contrastada con las alegaciones presentadas por la parte accionada; y, para ello nos planteamos el siguiente problema jurídico a resolver:

5.4 LAS ENTIDADES ACCIONADAS CON SUS ACCIONES U OMISIONES EN EL CAMPO DE LA EXPLOTACIÓN MINERA DE RECURSOS NATURALES HAN: ¿VULNERADO DERECHOS COMO: LOS DE LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHOS, AL BUEN VIVIR, DERECHOS DE LIBERTAD, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A N DESARROLLO SUSTENTABLE? ...Respecto a la prueba aportada: Debemos tener en cuenta que conforme al numeral primero del Art. 397 de la CRE, la carga de la prueba en este tiempo de acciones donde se analiza derechos difusos como el de la naturaleza, la carga de la prueba le corresponde a las entidades accionadas, esto es que los accionados debían acreditar que no se ha realizado actos de contaminación o afectación a la naturaleza en los sector indicados en la demanda o que se han puesto en peligro por una afectación real como es el caso a los ecosistemas del sector donde se indica la actividad le ha afectado o puesto en inminente peligro. El Art. 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional indica respecto a las pruebas que: “La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente.” El Art. 71 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Art. 86 Ibídem expresa que: “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: ...3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. En el Art. 395 Ibídem expresa: “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: ...4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. En este caso corresponde analizar los elementos probatorios que el Juez de primera instancia toma como sustento para poder emitir su fallo, en el siguiente orden que se resume en su parte medular de cada uno de ellos: Se han receptado los testimonios de los moradores: MARIBEL RAMÍREZ SÁNCHEZ, moradora, llegaba demasiado polvo, era intransitable, y las volquetas andaban a exceso de velocidad, y se han afectado la toma de agua, y es peligroso andar por ahí, y se ha incrementado el calor, son 17 familias en crecimiento. ROSA MAGALY AGUILAR AYALA, Yo he visto hace años que extraen el lastre y vía a las antenas, la captación del agua, se ha mermado, la misma que se ha cogido por años, con la extracción del lastre del material se reduce el agua. LEONARDO APOLO TORRES, La explotación nos ha afectado la calidad de vida, el agua que se está secando. b) El Informe Técnico de visita realizado a la comunidad La Mesa, cantón Piñas de la provincia de El Oro, debido a la actividad de extracción minera” elaborado en fecha 5 de marzo de 2020, por el equipo técnico conformado por Ingenieros miembros de “Metallura Equipo de Gestión Ambiental”, con base a la visita realizada a la zona afectada por la mencionada extracción de áridos y pétreos y zonas aledañas

los días 29 de febrero y 1 de marzo del presente año. Este archivo se encuentra en formato digital en un CD, y de sus testimonios, se extrae principalmente lo siguiente: LUIS ARMANDO CURILLO CHILLOGAZO, Ing. Agr. Andino, encontramos diversidad de animales, flora y fauna, aplicaron el método de la observación técnica, existe un desequilibrio de las especies que migran y desaparecen, y una gran alteración al paisaje. ING. JOSSELIN MIENTES, Que es necesario la conservación y cuidado del agua, que existe afectación por el ruido. El suelo participa en el efecto hidrológico y que se afecta por la explotación del suelo, produciendo un impacto negativo. ING. MARIELISA MUÑOZ TELLO, hallazgo, impacto visual, alteración en el cerro, con alteración grande. Alteración de las captaciones de agua y contaminación en el aire. Existen huellas de carbono. El suelo está perdiendo su capacidad de absorción, lo que afecta a los animales e indirectamente a las personas. El testimonio del Analista Social C.A.C.Z. D.H. P-C. De la Secretaría del Agua Ing. WILLIAM JAVIER JARAMILLO RUIZ, quien suscribió el documento que obra de fojas 129 a la 132, manifiesta que se encontró captación seca cerca de la zona de explotación y 2 captaciones de agua, se determina que, de continuar con la vía por ese sector, se podría afectar la captación Portete, y si los trabajo continúan la captación de agua La Mesa, puede afectarse esa captación. El testimonio del ING. RAÚL GAONA G. Técnico R.H. C.A.C.Z. D.H. P-C. De la Secretaría del Agua, quien suscribió el Informe de fecha 06/02/2020 SENAGUA, se pudo determinar que en el ramal de la quebrada “La Mesa” había aperturado una rampa por minería, a cielo abierto, habiendo una afectación con escombros por explotación minera. Existen dos tomas de agua “La Mesa” y “Portete”. Peligra su permanencia, y como no tienen un plan, están potencialmente en peligro, por la explotación. Efectos: Deforestación y pérdida del agua. El testimonio del PERITO AMBIENTAL, ING. JAIME ESPINOZA V.- En estas dos áreas se observa la degradación por actividades extractivas. Se encontraron dos puntos de captación de agua “La Mesa” “Portete” así también pasivos ambientales (material acumulado), no existen zonas concesionadas, según el catastro, siendo una explotación ilegal, existe explotación anti técnica, sin bermas de seguridad. AFECTACIÓN BIÓTICA (Flora) no existe debido a su explotación. Se trata de un ECOSISTEMA FRÁGIL, está dentro del área de influencia. FAUNA, no se puede apreciar porque se encuentra totalmente intervenida. Existen 2 abastecimientos de agua para consumo humano. Se observa afloramientos de aguas subterráneas; de seguirse las actividades se podrían alterar las fuentes de agua. El polvo que genera la actividad de explotación, puede causar sedimentación en las fuentes de agua o influir en los afloramientos del agua. En relación al aire no se pudo determinar, porque al momento de la inspección, no existía actividad de explotación. El suelo, es el que recibe el mayor impacto, por el desbroce de la vegetación, y se encuentra sin cobertura vegetal, como recomendaciones principalmente señala estabilizar los taludes, realizar actividades de revegetación entre otras. Debemos tener en cuenta que el Art. 25 del Código Orgánico del Ambiente establece: “Gobiernos Autónomos Descentralizados.- En el marco del Sistema Nacional de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos sus niveles, ejercerán las competencias en materia ambiental asignadas de conformidad con la Constitución y la ley. Para efectos de la acreditación estarán sujetos al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional.”; por lo tanto la misma entidad accionada es quien debe hacer el control ambiental en este caso En este caso de las premisas que anteceden y de la prueba actuada en primera instancia en éste proceso constitucional se determina apara que exista una correcta motivación de la sentencia de primera instancia esta debe basarse en los hechos probados en el proceso, lo que se llegó a acreditar es en sí lo siguiente: a) que se ha destruido más de nueve hectáreas del cerro “La Chuva” y al momento mucho material extraído y que conforme la Agencia de Regulación y Control Minero, SENAGUA, GAD Municipal de Piñas, esta actividad no estaría autorizada-concesionada por el Estado que es dueño de estos recursos, es decir no existe ningún permiso ni licencia para realizar esta actividad, lo que lleva

a la prenombrada autoridad a calificar la explotación como minería inconstitucional y prohibir la actividad. Que las fuentes hídricas que proporcionan agua a los moradores de los sitios el Portete y la Mesa, tienden a desaparecer”, ya que en la cantera 1 y 2 del cerro “La Chuva” existen ojos de agua destruidos por la explotación, brota agua desde el suelo por el movimiento de tierra que se ha hecho; además de la prueba actuada también se constató que existe un gran número de grietas de longitud extensa: (i) alrededor de las canteras, (ii) fuentes de agua (iii) inmuebles de comuneros con la amenaza de que parte del cerro pueda deslizarse hacia las comunidades aledañas a las canteras. Respecto a lo planteado por las entidades públicas como son: el GAD Municipal de Piñas, y del GAD Provincial de la Prefectura de El Oro, que debe primar un bien colectivo mayor, al de las Comunidades de La Mesa y el Portete, sosteniendo que los materiales pétreos, fueron utilizados para obras de la ciudadanía, este argumento carece de validez ya que como Jueces debeos ponderar los derechos del más débil y hacer ese ejercicio de ponderación cuando hay derechos constitucionales en coalición, en este caso está alegándose los derechos de las comunidades al buen vivir y los derechos de la naturaleza que es sujeta de que se proteja su intangibilidad y el desarrollo sustentable, plateada ésta problemática debemos tener en cuenta que esa comunidades estaban siendo parte de un grupo vulnerable a las decisiones de las entidades estatales que con sus justificativos de ser parte del Estado alegan estar exentos de cumplir con los controles ambientales, argumento que no es aceptable cuando esas entidades son los llamados a controlar los impactos ambientales por las actividades del ser humano. Entonces el primer argumento que no necesitan de licencias es inconcebible debían de tener al menos los estudios de impacto ambiental para garantizar que sus actividades se acoplan a un desarrollo sustentable y que el impacto a los ecosistemas del sector eran mínimos; hechos que nos llaman la atención y que el Ministerio del Ambiente debe aplicar sus competencias para controlar este tipo de abusos de la autoridad provincial y cantonal. Respecto a que las entidades accionadas no aportaron prueba de que sus actividades no han afectado a los ecosistemas, debieron probar que esos hechos no se han dado por su actividad, por lo que se dan como ciertos y que debe regularse sus actividades esto es que una vez que cuenten con los estudios de impacto ambiental obtener las licencias para sus actividades mineras, incluso se emplaza a consultar a las poblaciones aledañas si están de acuerdo en que se siga con este tipo de actividades en el sector. Por tanto debe tutelarse el derecho de la naturaleza a que no se afecte los ecosistemas ya que de la prueba actuada con el testimonio del PERITO AMBIENTAL, ING. JAIME ESPINOZA V.- En estas dos áreas se observa la degradación por actividades extractivas. Se encontraron dos puntos de captación de agua “La Mesa” “Portete” así también pasivos ambientales (material acumulado), no existen zonas concesionadas, según el catastro, siendo una explotación ilegal, existe explotación anti técnica, sin bermas de seguridad. AFECTACIÓN BIÓTICA (Flora) no existe debido a su explotación. Se trata de un ECOSISTEMA FRÁGIL, está dentro del área de influencia. FAUNA, no se puede apreciar porque se encuentra totalmente intervenida. Existen 2 abastecimientos de agua para consumo humano. Se observa afloramientos de aguas subterráneas; de seguirse las actividades se podrían alterar las fuentes de agua. Lo que se efectivamente se determina una afectación y más aún el buen vivir de los ciudadanos de ese sector estan totalmente afectados por el impacto que se da al medio ambiente, por lo tanto con ese análisis lógicamente prevalece el derecho de los habitantes de las Comunidades de La Mesa y el Portete sean tutelados, como sujetos de derechos y que se amparen los mismos. Bien como indica el Juez de primera instancia la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, derecho de este sujeto la naturaleza, que ha sido violentado claramente por entes públicos como por particulares, y que dicha hipótesis ha quedado contrastada con la pericia ambiental del Ingeniero Espinoza Vínces, quien científicamente ha logrado determinar la existencia del daño ambiental, y que al existir este daño se comprueba que con el accionar extractivista del GAD.

Municipal de Piñas, GAD. Provincial de la Prefectura de El Oro. Respecto a los ciudadanos Ángel Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, quienes no fueron accionados en el proceso de Acción Constitucional, conforme se desprende del numeral 2) del libelo de la demanda y numeral 1) del escrito mediante el cual completa y aclara la demanda, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Juez constitucional de instancia conforme consta de fs.75 a 92 y 93 a 95 respectivamente, constan únicamente como accionados el GAD de El Oro, el GAD de Piñas y el Ministerio del Ambiente, conforme se lee en la demanda y aclaración de la misma, por lo tanto en Tribunal Ad-quem en este punto concreto discreta con lo resuelto por el Juez Aquo, en relación a los señores Ángel Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, personas que no fueron demandadas y no tiene la calidad de accionados lo que conllevaría a la vulneración del derecho al debido proceso, en los términos que establecen los Arts. 75 y 76 numerales 1 de la Constitución de la República del Ecuador, esto es el derecho a acceder a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos. Por lo que en este punto concreto es pertinente analizar y determinar sobre la Legitimación activa y pasiva en la Acción Constitucional de Protección. Legitimación procesal.- En la doctrina procesal, la legitimación, definida en términos generales, es la capacidad o posibilidad de ejercer en juicio la tutela de un derecho. Esta legitimación, puede ser ad processum (en el proceso) o ad causam (en la causa), según se trate de la capacidad jurídica procesal para comparecer en juicio por sí mismo, como actor o demandado (legitimidad de personería); o de la condición perteneciente al actor o al demandado- de ser las personas llamadas a proponer una pretensión determinada, o a contradecirla. La legitimación en la causa, como concepto procesal que implica que la demanda sea propuesta por o frente a ciertas personas, que son las legitimadas para actuar como partes en un proceso determinado, puede ser de dos clases: activa y pasiva. a) La legitimación activa: Es quién puede proponer la demanda y levantar consecuentemente una pretensión, según la doctrina es “la aptitud para ser demandante en un determinado proceso”, o la que corresponde al actor o demandante y a las personas que posteriormente intervengan para defender su causa; esta clase de legitimación la posee la persona que está habilitada por la ley para formular las pretensiones de la demanda, aunque no posea el derecho sustancial pretendido o este corresponda a otra persona. b) La legitimación pasiva es por su parte la que pertenece al demandado y a quienes intervenga para controvertir la pretensión del demandante. En esta línea argumentativa la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), establece quienes pueden ejercer la legitimación Activa y Pasiva en las Acciones Jurisdiccionales, concretamente en la Acción de Protección 1.- Legitimación activa en la Acción de Protección.- La acción de protección, en cuanto a legitimación activa, se rige por las normas generales de las garantías jurisdiccionales. Según la Constitución, cualquier persona, grupo, pueblo, colectivo o nacionalidad pueden presentar la acción de protección sin que exista otro límite a la legitimación activa. Este es un elemento objetivo de la legitimación activa por el cual bastaría pertenecer a una de estas categorías: (i) persona; (ii) grupo; (iii) pueblo; (iv) colectivo; (v) nacionalidad; y, (vi) comunidad, para presentar una acción de protección. El artículo 9 de LOGJCC, determina en forma expresa quienes ejercer la "Legitimación activa" en las acciones de protección. “Art. 9.- Legitimación activa.- Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, b) Por el Defensor del Pueblo. Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce. En el caso de las acciones de hábeas corpus y extraordinaria de protección, se estará a las reglas específicas de legitimación que contiene esta ley”. La LOGJCC establece un elemento

subjetivo, por el cual solamente podrán ser actores de una garantía jurisdiccional, de acción de protección, quienes tengan calidad de víctimas directas o indirectas de la violación de derechos humanos que se alegue. 2) Legitimación Pasiva en la Acción de Protección.- La legitimación pasiva en la acción de protección se establece en el artículo 88 de la Constitución de la República en función de los actos u omisiones que se traten de impugnar: i. Actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. ii. Políticas públicas que priven el goce o ejercicio de un derecho constitucional. iii. Actos u omisiones de personas privadas que provoquen daño grave. iv. Actos u omisiones de personas privadas que presten servicios públicos impropios. v. Actos u omisiones de personas privadas que actúen por delegación o concesión del Estado. vi. Actos u omisiones de personas privadas cuando la persona afectada se encuentra en situación de subordinación, indefensión o discriminación. El artículo 41 de la LOGJCC, establece básicamente los mismos casos de legitimación pasiva que señala el Art. 88 de la Constitución de la República, especificando únicamente que las políticas públicas que pueden ser impugnadas son las dictadas por todos los niveles del Estado, he incluye un caso específico de procedencia de la acción en contra del prestador de un servicio público. De ser el prestador de servicios una instancia pública, entonces sus actos u omisiones entrarían dentro de los considerados en el acápite (i). De ser el prestador de servicio un privado, estaría actuando por delegación, concesión o prestado un servicio público impropio y, por tanto, incluido en los acápites iv y v. La legitimación pasiva es por su parte la que pertenece al demandado y a quienes intervengan para controvertir la pretensión del demandante. Bajo este contexto normativos constitucional y doctrinario, corresponde al Tribunal Constitucional de Apelación, al no ser demandados los ciudadanos Ángel Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, enmendar el error del juez A-quo en este punto concreto y modular la sentencia venida en grado tomando en cuenta que del libelo de demanda y aclaración a la misma los referidos ciudadanos frente a esta realidad procesal no cabe que se aplique el principio Iura Novit Curia por cuanto los referidos ciudadanos no constan como demandados o legitimados pasivo, en los términos que establece la LOGJCC, a quienes el A-quo les impone el cumplimiento de una reparación integral sin que sean parte procesal, observando el cumplimiento del debido proceso, que lleva implícito los principios de oralidad, contradicción, inmediación, dispositivo, publicidad y Tutela Judicial que hace efectivo el Principio de Igualdad formal y material y no discriminación, que deriva lo que en doctrina se conoce como igualdad de armas con las que litiguen las partes, conforme lo previsto en los Arts. 9, 66.4, Art. 76.7, 77, Art. 82 y Art.172 de la Carta fundamental, como garante del debido proceso corresponde a los Juzgadores tutelar el cumplimiento de las normas y derechos que les asiste a los sujetos de la relación jurídico procesal; como garantía de la seguridad jurídica en un estado constitucional de derechos. La sentencia dictada por el Juez constitucional de instancia cuenta con la fundamentación fáctica y jurídica que apoyada en la certeza, declara la vulneración de derechos constitucionales de la naturaleza al respeto integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, y el derecho de las comunidades “la mesa” y “el portete”, y de las personas al buen vivir, al agua y al ambiente sano; y demás garantías relacionadas a éstos, y consecuentemente acepta la acción de protección propuesta por los accionantes propuesta por los señores Liliana Maribel Ramírez Sánchez, en representación de la comunidad “La Mesa”, la naturaleza y las generaciones futuras; Rosa Magaly Aguilar Ayala, en representación de quienes integran la comunidad “Portete”; Manuel Jesús Quizhpilema Paguay, en re-presentación del sujeto de derechos de la Naturaleza cerro “La Chuva” y el colectivo ecologista Yasunidos Piñas, en contra del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS, representado por el Alcalde, señor Jaime Wilson Granda Romero, el Dr. José Aguirre Murillo, en calidad de Procurador Síndico del GAD. Municipal de Piñas; GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO, representado por el Prefecto Ing. Clemente Bravo Riofrío, Abg.

Francisco Moscoso Moscoso, en calidad de Procurador Síndico del GAD. Provincial de El Oro, sentencia que cumple con los estándares de motivación que determina la Corte Constitucional del Ecuador de Razonabilidad de la decisión que se expresa en la fundamentación de los principios constitucionales y legales esto es en el derecho; Lógica hace referencia a la existencia de la debida coherencia entre las premisas mayor concerniente al derecho y premisa menor los hechos facticos y la conclusión de aceptar la acción de protección, y Comprensibilidad que involucra la claridad del lenguaje utilizado en el texto de la sentencia es de fácil comprensión y entendimiento de quien acede a su lectura; en los términos que establece el artículo 76 numeral 7 literal I) de la Constitución de la República del Ecuador, explica las razones por la que se ha creado certeza en el juzgador sobre la vulneración de los derechos constitucionales vulnerados que conlleva aceptar la Acción constitucional propuesta. El Tribunal Ad-quem, considera que la sentencia venida en grado contiene una correcta y adecuada valoración de las pruebas aportadas en la audiencia oral pública y contradictoria de Acción de Protección acorde a las normas legales, Principios y garantías constitucionales que garantizan la seguridad jurídica, en un estado constitucional de derechos y justicia, por lo tanto comparte el criterio jurídico del Juez A-quo realizando la respectiva modulación de la reparación integral respecto a los demandado o legitimados, conforme el análisis ut supra.

SEXTO: SENTENCIA. Por las consideraciones expuestas, el Tribunal de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de EL ORO, ADMINISTRANDO JUSTICIA CONSTITUCIONAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, por decisión unánime RESUELVE: 1) CONFIRMAR LA SENTENCIA venida en grado, que acepta la acción de protección y DECLARA LA VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL de la naturaleza al respeto integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, y el derecho de las COMUNIDADES “LA MESA” y “EL PORTETE”, y de las personas al buen vivir, al agua y al ambiente sano; y todas las garantías relacionadas a éstos, como ha sido abordado ampliamente en la resolución, contemplados en los artículos 71, 12, 14 y Cap. II DERECHO DEL BUEN VIVIR, de la Constitución de la República del Ecuador, que DECLARA LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONADOS; propuesta por los señores Liliana Maribel Ramírez Sánchez, en representación de la comunidad “La Mesa”, la naturaleza y las generaciones futuras; Rosa Magaly Aguilar Ayala, en representación de quienes integran la comunidad “Portete”; Manuel Jesús Quizhpilema Paguay, en re-presentación del sujeto de derechos de la Naturaleza cerro “La Chuva” y el colectivo ecologista Yasunidos Piñas, en contra del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS, representado por su Alcalde, el señor Jaime Wilson Granda Romero, el Dr. José Aguirre Murillo, en su calidad de Procurador Síndico del GAD. Municipal de Piñas; GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO, representado por su Prefecto, el señor Ing. Clemente Bravo Riofrío, el Abg. Francisco Moscoso Moscoso, en su calidad de Procurador Síndico del GAD. Provincial de El Oro. Por ajustarse a lo que dispone, los numerales 1, y 4 literal “c”, del artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; modulando la sentencia en cuanto a la reparación integral que corresponde a los accionados o demandados.

1.1 REPARACIÓN INTEGRAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS ACCIONADOS O DEMANDADOS: Como reparación material e inmaterial: Se ordena de forma inmediata la reparación integral de los pasivos ambientales y sociales, de las áreas explotadas del cerro La Chuva, y de las Comunidades “La Chuva” y “El Portete”, que se han visto afectadas con estas actividades, con el objetivo de que en medida de lo posible, de que los derechos constitucionales vulnerados vuelvan a su estado anterior, o a su vez se aproximen a este para su disfrute; para lo cual se valorará sus efectos reales; disponiéndose la intervención del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), del Ministerio del

Ambiente y Agua, o el que estuviere vigente a la fecha de ejecución, quienes deberán diseñar y ejecutar el respectivo Plan de reparación de los pasivos ambientales y sociales a aplicarse en el caso concreto, además el Plan se ejecutará en asocio con los técnicos de los GAD. Municipal de Piñas, y del GAD. Provincial de El Oro y sus especialistas de la rama, quienes deberán realizar un Informe inicial de todas las actividades a realizarse, y cada 6 meses deberán presentar Informes de cumplimiento, hasta que se materialice todo el proceso de reparación integral de los pasivos ambientales y sociales. Los gastos del mencionado Plan de reparación de los pasivos ambientales y sociales serán cubiertos de manera equitativa por parte del GAD. Municipal de Piñas, el GAD. Provincial de El Oro y el Ministerio del Ambiente y Agua, para esto de los Gobiernos autónomos descentralizados, así como el referido ministerio, deberán proyectar los gastos, para que se genere la respectiva partida presupuestaria, así también que el incumplimiento de uno de los obligados, so pena de ejercerse en su contra las respectivas acciones por incumplimiento, que contempla la norma procesal constitucional; para lo cual se realizará las respectivas comunicaciones. 1.2 A efectos de dar seguimiento, y que se ejecute lo ordenado en el literal anterior, se manda a intervenir de forma permanente a la Defensoría del Pueblo Ecuador, Delegación de la Provincia de El Oro, y al Ministerio del Ambiente y Agua, quienes deberán presentar un Informe inicial y también Informes semestrales sobre el avance de la ejecución del Plan de reparación de los pasivos ambientales y sociales, hasta su culminación, para lo cual se realizará las respectivas comunicaciones. Como garantía de no repetición, y con la finalidad de evitar que se continúe con el daño, y vulneración de derechos constitucionales (explotación de recursos naturales, que se ha venido realizando por más de 80 años aproximadamente) se dispone suspender indefinidamente todo tipo de explotación y actividades mineras en el cerro “La Chuva”, para lo cual se oficiará al GAD. Municipal de Piñas, al Ministerio del Ambiente y Agua, al Ministerio de Energías y Recursos Naturales no renovables del Ecuador, quienes se abstendrán de conceder concesiones en el lugar (cerro “La Chuva”) A excepción de las concesiones, permisos o licencia que se encuentren vigentes de las cuales se deberá hacer una auditoria por el Ministerio del Ambiente para verificar si cumplen o no con sus requisitos y no están causando afectaciones a la naturaleza. 1.3 Como medida de reparación inmaterial se dispone denominar al Plan de reparación así: “PLAN DE REPARACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES CERRO “LA CHUVA” PIÑAS”, denominación que deberá utilizarse para referirse al plan en cualquier espacio, y en todo momento, por parte de autoridades públicas, privadas y la ciudadanía. Se dispone que los accionados, GAD. Municipal de Piñas, GAD. Provincial de El Oro, procedan a pedir disculpas públicas a los accionantes, en un acto solemne, y se informará a esta autoridad de su cumplimiento. 1.4 Se dispone la publicación de la presente sentencia, en los sitios web oficiales de los GAD. Municipal de Piñas, GAD. Provincial de El Oro, Ministerio del Ambiente y Agua, y del Ministerio de Energías y Recursos Naturales no renovables, por el lapso mínimo de 90 días. 2) Se excluye de esta resolución y consecuentemente de la reparación integral a los ciudadanos Ángel Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, quienes no son accionados o demandados conforme se desprende del numeral 2) del libelo de la demanda y numeral 1) de escrito que completan y aclaran los accionantes dando cumplimiento a lo dispuesto por el Juez constitucional de instancia conforme obra de fs.75 a 92 y 93 a 95 respectivamente. 3) Intervenga la Ab. Gina Sánchez Sotomayor, Secretaria del Tribunal Ad-quem.- Ejecutoriada la presente sentencia, siente razón correspondiente y remita copia certificada a la Corte Constitucional, conforme lo dispone el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

f: MEDINA CHALAN MARIA JESUS, Juez Provincial; PIEDRA AGUIRRE OSWALDO JAVIER, JUEZ; MEJIA GRANDA MANUEL JESUS, JUEZ

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

SANCHEZ SOTOMAYOR GINA ELIZABETH
SECRETARIO